

Editorial

El desafío histórico de El Salvador

Dos meses después del comienzo del cese del enfrentamiento armado ya quedan lejos la euforia política y el entusiasmo popular con que fueron recibidos el Acuerdo de paz y el final de la guerra. La dura rutina de la vida cotidiana nacional pareciera haber olvidado los importantes logros conseguidos en el Acuerdo de paz. A ello han contribuido los primeros obstáculos encontrados en el camino de la pacificación y la insidiosa labor de la propaganda oficial y no oficial.

Pese a todo ello, no hay que perder la perspectiva del proceso de pacificación. Los dos primeros meses del cese del enfrentamiento armado arrojan resultados muy positivos: después de una violenta y cruel guerra civil de casi doce años de duración, en los primeros sesenta días de vigencia del acuerdo, no se ha producido ningún incidente ni se ha roto el fuego, pese a que las fuerzas militares de ambas partes han estado a unos pocos metros de distancia. En un cese del fuego lo normal es que se produzcan algunos incidentes, que incluso pongan en peligro el acuerdo tomado; pero en El Salvador esto no ha sucedido. La guerra se ha detenido y cada día que pasa sin incidente, nos alejamos más de ella.

Asimismo, hay que considerar que se han dado los primeros pasos para la disolución de dos de los cuerpos de seguridad más represivos y para la integración de la nueva policía. El mandato de la Fuerza Armada ha cambiado radicalmente al ratificarse la respectiva reforma constitucional. La comisión responsable de supervisar el cumplimiento del Acuerdo de paz y el desarrollo del proceso de pacificación, venciendo vicios e inercias estructurales, ha estado trabajando para cumplir con sus responsabilidades políticas y sociales. Las partes han llegado a una concertación mínima sobre el plan de reconstrucción.

Por lo tanto, en dos meses se ha conseguido bastante, aunque no todo lo que estaba previsto en el Acuerdo de paz. Lo importante es que el país ha entrado en el proceso de pacificación con paso firme. Es cierto

El problema agrario persistirá como un elemento determinante, aunque no único, del subdesarrollo nacional.

que han surgido algunas dificultades y hasta podríamos aceptar que ha habido crisis, pero ninguna de ellas, ni siquiera todas juntas, ha puesto en peligro serio al proceso en su globalidad. Las primeras dificultades, normales hasta cierto punto, no deben hacer perder la perspectiva de la totalidad del proceso. El Acuerdo de paz debe ser considerado como un gran proceso que, al final, tiene posibilidades reales para dejarnos un El Salvador más justo, más veraz, más liberado y más democrático.

1. Las resistencias al proceso

Las dificultades que han entorpecido la marcha del proceso de pacificación obedecen, en último término, a que éste ha impactado las estructuras del país. Si no fuera así, el proceso no encontraría mayores dificultades en su marcha; pero eso significaría que no estaría modificando el país. Aquello que no pudo ser cambiado a través de los medios previstos en la Constitución, ha tenido que ser modificado a través de la mesa de negociación. Al comenzar las transformaciones, las estructuras afectadas se han remecido. Es normal que haya estremecimientos, porque el país se está moviendo al fin y, aparentemente, lo está haciendo en la dirección correcta. Por lo tanto, no debe extrañar que los estremecimientos se conviertan en resistencias por parte de quienes rechazan los cambios. Lo anormal sería que no se produjeran estos sobresaltos, pero entonces El Salvador seguiría siendo más o menos lo mismo.

Las resistencias principales al proceso han surgido, precisamente, en dos puntos vitales para la pacificación del país: en la tenencia de la tierra y en los medios para controlar a la población. Los dos elementos están estrechamente relacionados y las resistencias que se han suscitado a su alrededor explican, por sí mismas, que el proceso, como totalidad, avanza por el camino correcto, aunque lentamente. Las resistencias han surgido de la misma conflictividad social del país, pero han sido alimentadas por las imprecisiones y por las ambigüedades del Acuerdo de paz.

Sin duda, en la mesa de negociación no se pudo avanzar más ni tener más claridad en estos puntos cruciales. Por lo tanto, la negociación ha debido continuar a lo largo de estos dos meses primeros e, indudablemente, seguirá en los meses venideros. El proceso de pacificación debe considerarse como un gran proceso de negociación, en el cual las fuerzas políticas y sociales deben ir encontrando las transformaciones y los reajustes que deben hacerse en las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales del país. Si hay negociación es normal que haya tensiones y forcejeos; para el futuro del país lo importante es que haya negociación y se llegue a consensos.



Las ocupaciones ilegales de tierras y los desalojos que violan lo acordado entre las partes, por un lado, y la negativa de algunos sectores duros del capital a reconocer la ocupación de las tierras que se encuentran en las zonas conflictivas por sus tenedores actuales (mientras se da una solución legal satisfactoria definitiva), por otro lado, han venido a recordar la transcendencia y la urgencia que tiene el país de enfrentar serena y racionalmente la estructura de la propiedad de la tierra. Este es un viejo y explosivo problema que se viene arrastrando desde finales de la década de los sesenta, cuando el presidente de entonces, abrumado por el problema, convocó a un congreso de reforma agraria. Desde entonces hasta ahora, los grandes terratenientes se han opuesto a todos los intentos para reformar la estructura de tenencia de la tierra, sumiendo cada vez más en la miseria a miles de campesinos sin ella.

Para consolidar la paz es indispensable encontrar una solución racional a este viejo problema, el cual, además, es una de los principios fundamentales de la guerra. El Acuerdo de paz ofrece una nueva oportunidad para avanzar en su resolución. En realidad, su propuesta es tímida y de un alcance muy corto, pero no por ello debe ser despreciada, pues contiene buenas posibilidades para reestructurar la tenencia de la tierra a mediano y largo plazo. La propuesta de reforma agraria de Duarte y de Estados Unidos era mucho más radical que la propuesta actual. Sin embargo, esta última ha generado una respuesta violenta de parte de los terratenientes, asociados en las gremiales cafetalera, algodonera, ganadera, y de la ANEP.

Estos sectores no admiten cambio alguno en la estructura agraria,

así como tampoco admiten modificación alguna en la estructura social del país. Para ellos, las cosas deben seguir como estaban antes del conflicto. Su cultura política, por otro lado, les impide aceptar un contexto político de transacciones y de acuerdos. En cuanto el Acuerdo de paz no sólo pone fin al conflicto armado, sino que, también, busca alterar sustancialmente la estructura social, estos sectores se consideran perdedores; de ahí que estén tratando de desestabilizar el proceso de pacificación. Las tomas de tierras y el conflicto laboral de la ADOC les han ofrecido el primer pretexto. Por lo tanto, conviene no confundir los pretextos con las verdaderas razones estructurales.

Pero la conciencia social ha avanzado mucho más rápidamente que lo que estos sectores reaccionarios quisieran. Los medianos y pequeños propietarios de tierras, mucho menos ideologizados que los grandes propietarios y algunos dirigentes del gran capital, aceptan la oferta del Acuerdo de paz y sólo reclaman un precio justo para vender sus propiedades.

Después de una enconada polémica nacional a todo nivel, los pretextos desestabilizadores de los sectores contrarios al Acuerdo de paz fueron desarticulados por un nuevo acuerdo entre las partes para congelar el problema, de tal manera que el FMLN se ha comprometido a hacer todo lo posible para evitar que se realicen nuevas tomas de tierras, mientras que el gobierno hará también otro tanto para evitar nuevos desalojos. Este compás de espera permitirá llevar a cabo una serie de trabajos preliminares, entre ellos, verificar el inventario de tierras presentado por el FMLN.

Si las provisiones del Acuerdo de paz sobre las tierras, reivindicación fundamental para los ex combatientes del FMLN y para la población rural que lo apoyó, se llegan a cumplir, se habrá dado un paso trascendental para satisfacer una de las aspiraciones más sentidas de los miembros y simpatizantes del FMLN, para romper el férreo principio de la propiedad privada y para demostrar que los problemas más difíciles pueden resolverse sin recurrir a medios violentos.

Ahora bien, pese a todas estas ventajas, el problema agrario persistirá como un elemento determinante, aunque no único, del subdesarrollo nacional, puesto que el área rural no afectada por el conflicto, la modernización tecnológica y el patrón de especialización no están contemplados en el Acuerdo de paz. Es decir, el Acuerdo tiene un límite geográfico y otro temático al contemplar sólo la propiedad.

El segundo foco de resistencias surgió alrededor de los instrumentos para controlar a la población. Lo más escandaloso ha sido la forma adoptada por el gobierno para suprimir a la Policía de Hacienda y a la Guardia Nacional, cuerpos de seguridad a los cuales sólo les cambió de

nombre y les dio nuevas funciones como policía militar y de fronteras respectivamente, violando lo acordado. Los efectivos de ambos cuerpos de seguridad, al desaparecer como tales, deben ser dados de baja o, si los absorbe el ejército, deben reconcentrarse en aquellos puntos designados por las partes, abandonando todos los cuarteles y puestos, cosa que no se ha hecho. La salida gubernamental fue más bien un intento inútil para conservar estos dos cuerpos de seguridad, a los que la oligarquía considera fundamentales para defender sus intereses y, en cuanto tales, han sido los responsables principales de la represión antes y durante la guerra.

La desaparición de dos de los cuerpos de seguridad y la transformación sustancial del otro son considerados por la oligarquía como pérdidas irreparables. Sin ellos se siente desprotegida. Con la disolución de estos cuerpos de seguridad, con la transformación de la antigua policía en otra distinta, conformada de acuerdo a la doctrina democrática, y con la disolución de todos los cuerpos paramilitares, sobre todo de las defensas civiles, la oligarquía pierde el instrumento para coaccionar y reprimir a la población. Su sensación de abandono se ha confirmado al verse obligada a recurrir a la ley y al sistema judicial para presentar sus reclamos agrarios. No debe pasar desapercibido que los desalojos que se han llevado a cabo han sido ejecutados por un juez y la policía; ni los antiguos cuerpos de seguridad ni el ejército han podido acudir en auxilio de los terratenientes, tal como era costumbre. Por eso, la oligarquía atribuye al Acuerdo de paz el renovado auge de la delincuencia común.

La maniobra del gobierno en la disolución de los cuerpos de seguridad no puede separarse de los retrasos que ha habido para echar a andar la nueva academia de seguridad pública y la misma policía. Han sido retrasos que, en buena medida, manifiestan resistencias a crear una nueva institución para garantizar la seguridad ciudadana en un Estado democrático moderno.

La intervención de Naciones Unidas también ha zanjado esta cuestión. El gobierno ha asegurado al organismo internacional que los efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía de Hacienda no serán utilizados en la seguridad pública y que lo antes posible se concentrarán en los puntos previstos en el Capítulo VII del Acuerdo de paz. Por el otro lado, el FMLN, que, en parte, como medida de presión, y, en parte, por no contar con la infraestructura mínima necesaria, no había concluido la concentración de sus tropas en los quince puntos establecidos en el Acuerdo, dio seguridad a Naciones Unidas para hacerlo tal como estaba negociado, pero en el entendido de que ONUSAL y el gobierno finalizarán rápidamente los arreglos infraestructurales. El gobierno también tuvo que dar seguridades similares, puesto que tampoco ha

completado la concentración de sus fuerzas militares en los puntos acordados.

Estas resistencias han sido acompañadas por la actividad de los escuadrones de la muerte, los cuales han sabido recordar su presencia y su capacidad para actuar impunemente con el brutal asesinato de varias personas; asimismo han intimidado y amenazado directamente a algunas organizaciones e instituciones vinculadas al FMLN. La brutalidad de estos asesinatos, sobre todo el de un vigilante de un local sindical que fue degollado prácticamente, ha recordado a la población que estos aparatos del terror todavía existen y pueden actuar impunemente. El mensaje también iba dirigido a la cúpula de FMLN. Sin embargo, lo más preocupante no ha sido tanto los asesinatos y las amenazas en sí mismos, como la pasividad e indiferencia con que éstos han sido tomados por el gobierno y por la conciencia nacional en general. No ha habido condenas, ni promesas de las consabidas investigaciones exhaustivas. Ni siquiera el nuevo procurador de los derechos humanos se ha dado por aludido.

De esta forma, la pasividad y la indiferencia siguen siendo parte de la impunidad. Mientras no se avance en la desarticulación de los aparatos de represión y de terror, entre ellos los cuerpos de seguridad y las defensas civiles, el proceso de pacificación estará siempre amenazado. Esto es más preocupante aún cuando ONUSAL constata, en su tercer informe, que comprende los últimos meses del año pasado, que el Estado salvadoreño no ha cumplido con las recomendaciones que se le han hecho en los dos primeros informes, especialmente en lo que se refiere a las ejecuciones sumarias, a la documentación personal de miles de ciudadanos y al derecho internacional humanitario.

En efecto, el tercer informe de ONUSAL afirma, lamentablemente, que del Estado salvadoreño no se puede esperar mucho en materia de justicia, puesto que ni siquiera es capaz de defender el derecho a la vida de sus ciudadanos, porque "las medidas tomadas para reunir las pruebas de los hechos, así como para buscar, identificar y detener a los presuntos autores, fueron insuficientes o inexistentes. La inactividad del sistema judicial y de la policía o las deficiencias en la investigación de los hechos, en casos de muertes debidas a causas no naturales, constituyen un incumplimiento de las recomendaciones de la ONU sobre el deber de garantizar y de proteger el derecho a la vida". ONUSAL también ha comprobado la implicación de funcionarios públicos en la tortura, en

La desaparición de dos de los cuerpos de seguridad y la transformación sustancial del otro son considerados por la oligarquía como pérdidas irreparables.

los malos tratos y en las penas crueles, inhumanas y degradantes, y múltiples fallas en las instituciones encargadas de controlar esos abusos y de castigar a los culpables.

En lugar de asumir sus responsabilidades estatales y de comenzar a dar pasos para corregir las deficiencias comprobadas en la investigación de las violaciones de los derechos humanos y de los crímenes co-



munas, el Estado se ha vuelto contra ONUSAL, protagonizando un penoso incidente al impedir violentamente que uno de sus funcionarios de más alto rango hablara a los diputados sobre los derechos humanos. El escándalo ha descubierto que ninguno de los miembros de la misión se encuentra debidamente acreditado, no obstante haber sido aceptados por las partes e invitados por el gobierno. Más aún, el gobierno pretende atribuirse el derecho de recusar a cualquier funcionario de la misión que no sea de su agrado. Esta torpeza política y miopía diplomática corresponden a viejas prácticas y son otras formas de resistir el Acuerdo de paz.

2. El modelo oligárquico seriamente cuestionado

Las resistencias que ha encontrado el proceso de pacificación en estos dos primeros meses han provenido de los sectores oligárquicos. La reacción de la oligarquía al Acuerdo de paz y al proceso de pacificación, a través de la ANEP y de los grandes medios de comunicación social, ha sido visceral, impidiendo todo tratamiento objetivo de la problemática planteada. Hay un sector importante del ejército que, de forma más disimulada, pero igualmente peligrosa, también ha reaccionado en los mismos términos de aquélla. Su descontento se origina en que, según ellos, el gobierno ha cedido todo a cambio de nada. ¿Es correcta esta percepción de la oligarquía y del ejército? Si lo es, ¿la entrega ha sido total? Si no lo es, ¿cómo se explica esa percepción y, en último término, la resistencia que estos sectores presentan al proceso de pacificación? Intentemos responder a estas interrogantes.

Es falso que el gobierno haya cedido todo a cambio de nada. Si bien el gobierno entregó espacio político, con ello logró detener la guerra. Si, por un lado, aceptó el fracaso de la represión como medio para suprimir el conflicto social y la necesidad de hacer reformas para modernizar el Estado y la sociedad, por el otro lado, consiguió mantener el orden económico capitalista y su programa de ajuste estructural. Hace falta estar ciego por la obcecación para no valorar las ventajas obtenidas con el Acuerdo de paz por el lado gubernamental.

El FMLN desbloqueó políticamente el empate militar, en una coyuntura internacional desfavorable, contraria a las posibilidades políticas de la lucha armada. A cambio de ello, aceptó no cuestionar el orden económico capitalista ni la institucionalidad del Estado actual, en la medida en que se le abría espacio político para actuar en ella. El FMLN ha aceptado mucho, casi demasiado, si tenemos en cuenta la evolución de sus posiciones frente a la economía y el Estado.

Estados Unidos también obtuvo ventajas, al encontrar una salida aceptable para una situación embarazosa en su "patio trasero", cuyo

En cualquier caso, el que más ha perdido no es el capital privado en su conjunto, sino las mayorías populares que no han podido hacer avanzar su proyecto histórico.

costo ascendía ya a unos seis mil millones de dólares con muy pocos resultados militares y políticos. Al entrar en una época de distensión mundial, las salidas militares ya no interesan a Estados Unidos; ahora busca establecer nuevas relaciones de dependencia económica y de subordinación política para incorporar más rápidamente a la región centro-americana en su proyecto de mercado único americano.

También la Fuerza Armada, aunque algunos no lo acepten, ha sacado ventajas de la negociación. En primer lugar, ha conseguido una salida digna. No se han cuestionado ni su existencia ni ciertos privilegios económicos, todo ello a cambio de reducirse y depurarse. En segundo lugar, el cambio de su doctrina y la subordinación al poder civil implican modificaciones estructurales en el ejército, pero, pese a ellas, seguirá siendo un factor de poder preponderante. Mientras exista el ejército siempre habrá posibilidad para usarlo como un instrumento de desestabilización y de golpismo, de lo cual no están liberadas ni siquiera las democracias más antiguas de América Latina, tal como lo está demostrando en la actualidad el caso de Venezuela.

Las mayorías populares han ganado una ampliación del espacio político, han incorporado a la cultura el respeto de los derechos humanos, la disminución de la represión, mayor seguridad general y los beneficios del plan de reconstrucción en las antiguas zonas de conflicto; sin embargo, han perdido tiempo y espacio para su proyecto histórico —un amargo resultado de la miopía histórica de sus dirigentes, quienes, en 1979, debido a las corrientes ideológicas predominantes, a cierta precipitación y a una euforia abstracta, apostaron por una salida radical que nunca se dio.

Una evaluación objetiva de las ventajas y desventajas que el Acuerdo de paz proporciona a los distintos actores muestra que todos ellos han obtenido ventajas importantes así como también todos han cedido en puntos también importantes. En cualquier caso, el que más ha perdido no es el capital privado en su conjunto, sino las mayorías populares que no han podido hacer avanzar su proyecto histórico, puesto que sólo han ganado espacio para promoverlo en el futuro.

Entonces, si ni el gobierno ni el capital pueden considerarse como perdedores absolutos, ¿por qué una resistencia tan visceral de la oligarquía? Porque lo que más resiente y resiste la oligarquía es el fin del militarismo, pero no del militarismo en sí, sino por las vinculaciones que ambos tenían entre sí. Históricamente, el militarismo ha sido el instru-

mento de la oligarquía para evitar el desarrollo económico y las transformaciones sociales y políticas. Con el Acuerdo de paz, la oligarquía ha perdido su instrumento indispensable. Esta pérdida de la oligarquía es una reivindicación histórica que varias veces se intentó en vano en este siglo, desde el proyecto modernizante de los Meléndez Quiñónez, pasando por el golpe de Estado de 1979. Con ello, el Acuerdo de paz pretende eliminar el control del ejército sobre el poder del Estado y subordinarlo al poder civil, rompiendo otra tradición de sesenta años.

Estas dos novedades del Acuerdo de paz significan la derrota del capitalismo históricamente dominante en el país y de su ordenamiento institucional. El que realmente ha perdido con el Acuerdo de paz es el capital oligárquico, muy vinculado a los sectores agroexportadores tradicionales. Su percepción de derrota, en cuanto pérdida de su poder militar y estatal, es correcta. El Acuerdo de paz es una nueva oportunidad para romper con este modelo reaccionario de capitalismo.

3. El desafío histórico de El Salvador

La ruptura definitiva con el capitalismo oligárquico reaccionario no significa el final del modelo capitalista ni mucho menos. El Acuerdo de paz ha puesto límites a las transformaciones económicas posibles, que las partes se han comprometido a respetar. Esos límites van desde control político del Estado hasta la aceptación del modo de producción capitalista y el modelo neoliberal, pasando por la aceptación del orden constitucional actual. El FMLN ha aceptado participar plenamente en este contexto. En consecuencia, el FMLN ha aceptado un determinado modelo capitalista con su correspondiente orden institucional.

El Acuerdo de paz no ha cuestionado el sistema capitalista ni el Estado democrático en cuanto tales, sino el capitalismo oligárquico y su correspondiente Estado militarizado. Lo que está en juego entre quienes aceptan el Acuerdo y quienes se resisten a él es el tipo de capitalismo más adecuado para El Salvador. De hecho, esa es la discusión en todos los partidos y de todos los programas en elaboración. Por lo tanto, esta es la gran oportunidad para derrotar definitivamente a la oligarquía y sus modelos económico y político, y junto con ella, para poner fin al militarismo que le ha permitido predominar durante décadas, con un elevadísimo costo para todos los salvadoreños, pues con sus políticas cortoplacistas ha impedido el desarrollo económico y político del país. En la actualidad, el modelo oligárquico es obsoleto y quienes persisten en mantenerlo van en contra de la historia.

El desafío histórico que tiene planteado El Salvador sólo podrá ser asumido con éxito si el capital progresista tiene capacidad política para aliarse con otras fuerzas sociales, a cambio de conceder algunas mejo-



ras sociales y laborales para derrotar políticamente a los sectores oligárquicos extremistas. En este sentido y en este momento, la discusión del modelo neoliberal es secundaria, frente al reto histórico que representa esta alianza entre el capitalismo progresista y otras fuerzas sociales para terminar con el predominio oligárquico sobre el aparato productivo y el Estado.

La dirigencia del FMLN así lo entiende en el Acuerdo de paz y, de hecho, lo ha confirmado en la práctica al respaldar el plan de reconstrucción nacional. En su discurso programático del 1 de febrero, el comandante Villalobos dijo, "creemos en el derecho al enriquecimiento lícito, basado en el esfuerzo del trabajo, creemos en la libertad individual, pero consideramos que si no hay sensibilidad social, la riqueza en vez de ser motor de desarrollo se convierte en generadora de conflicto", por eso, añadió, "no creemos en el monopolio de la riqueza y del poder político... El problema no es que haya ricos, sino que sean tan pocos y que la mayoría de los salvadoreños sean extremadamente pobres" (ECA, 1992, 519-520: 171-172).

El movimiento social debe tener claridad suficiente sobre la complejidad del proceso de pacificación porque, de lo contrario, se puede perder esta nueva oportunidad para sepultar el modelo oligárquico al querer alcanzar lo que éste no puede dar de sí, en este momento. Aparte de que, para avanzar firmemente, es fundamental eliminar el obstáculo que representan las fuerzas oligárquicas y el militarismo. No se debe repetir el error histórico y político de 1979.

A primera vista, la alianza entre el capital progresista y el movimiento social puede parecer extraña y hasta contradictoria. Pero examinadas las cosas de cerca no es así. En el Acuerdo de paz hay un pacto implícito entre el capital progresista, apoyado por Estados Unidos y la comunidad financiera internacional, y el proyecto del FMLN. Para ambos, el proyecto oligárquico carece de futuro, por lo tanto, los dos aceptan reformas como la agraria, pero no la entrega de poder. Por lo tanto, la alianza es posible en cuanto tiene fundamentos reales al haber ciertos intereses comunes, y es necesaria para desarticular el aparato represivo que ha sostenido la hegemonía de la oligarquía.

Sorprendentemente, el gobierno del presidente Cristiani está dando muestras de no tener claridad política sobre las posibilidades del proceso. Su compromiso con esas posibilidades ofrecidas para modernizar el Estado, la economía y la sociedad, es aún vacilante, cuando no contradictorio. En estos momentos, su gobierno se encuentra atrapado entre quienes en su partido optan por una postura dura e intransigente, sin visión de futuro, que son la mayoría, y el pequeño sector inclinado a comprometerse con la modernización del país. Por el otro lado, no hay que descartar los compromisos que el presidente ha contraído con los militares, los cuales serían otro pesado lastre para su gobierno.

El gobierno actual se encuentra, pues, ante una encrucijada difícil, pero determinante para los años que le quedan en el poder. O se compromete firmemente con el proceso de pacificación y sus posibilidades, apoyándose en el sector progresista del capital y promoviendo la alianza

entre éste y el movimiento social para derrotar a la oligarquía, o se deja absorber por las presiones y las intrigas de ésta. Si opta por lo primero, puede hacer una gestión gubernamental brillante e importante para el futuro del país; si opta por lo segundo, irá dando tumbos entre los compromisos adquiridos y la presión nacional e internacional para cumplirlos y las exigencias de la oligarquía. Así, entre tropiezo y tropiezo, terminará sus días desprestigiado y sin haber cumplido con su responsabilidad histórica. La primera opción supondría responder a los intereses sociales que supuestamente representa, pero para ello tendrá que romper de manera definitiva con la oligarquía; la segunda opción supondría defender unos intereses ajenos y trasnochados, hipotecando aún más el futuro del país.

El Salvador se está moviendo al fin hacia una sociedad más moderna económica y socialmente. Pero este movimiento es procesual, es decir, debe recorrer una serie de etapas o momentos, que deben sucederse unos a otros, rigurosamente. En cuanto proceso, tiene su tiempo, que no necesariamente es el tiempo del calendario establecido en el Acuerdo, porque el tiempo procesual depende de la dinámica interna del proceso mismo, y, en este sentido, depende en parte de las dificultades que vaya encontrando. Lo fundamental es avanzar y trabajar para que el proceso siga avanzando, porque cada paso firme lo hace más irreversible. La presión del calendario es provechosa para mantener presión sobre la dinámica y el ritmo, pero nunca debe absolutizarse el calendario, corriendo el riesgo de quedarse al final con un calendario cumplido sin contenidos.

El Acuerdo de paz hay que considerarlo no tanto por sus potencialidades inmediatas, sino por sus potencialidades a mediano y largo plazo, es decir, debe ser considerado por las posibilidades que abre para el futuro social y económico del país.

San Salvador, 25 de marzo de 1992.